

AÑO XXIX — ABRIL-JUNIO DE 1961 — N° 116

REVISTA DE DERECHO

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

SUMARIO

	Pág.
FRANCISCO VARAS DODD	
Lo Jurídico en algunas obras de Shakespeare	3
EMILIO RIOSECO ENRIQUEZ	
La subestimación del Derecho	15
RAMON DOMINGUEZ BENAVENTE	
Concepto del Derecho Sucesorio	39
CARLOS FERDINAND CUADROS	
La crisis del Procedimiento	83
MARIO CERDA CATALAN	
¿En cualquier tiempo puede notificarse el protesto de un cheque?	95
HECTOR OBERG YAÑEZ	
Comentario al artículo 91 del Código Tributario	105
TITO JARA TRONCOSO	
En torno a algunas realizaciones de la Jurisprudencia Sociológica	111
Declaración de principios y recomendaciones sobre la enseñanza del Derecho (Ciencias Jurídicas y Sociales) en América Latina	133
JURISPRUDENCIA	
<u>Corte de Apelaciones de Chillán</u>	
Nulidad de contratos y de testamento (Apelación de la sentencia definitiva). (Comentario de Ramón Domínguez Benavente)	143

**PUBLICACIONES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Y DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE CONCEPCION**

DECLARACION DE PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO (CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES) EN AMERICA LATINA

Proyecto de Redacción definitiva para el documento aprobado en general por la Primera Conferencia de Facultades de Derecho Latinoamericanas (México, 1959), presentado a la aprobación de la Segunda Conferencia (Lima, 1961) por la Comisión Especial integrada por los Presidentes de las Delegaciones concurrentes (1).

P R I N C I P I O S

I. Fines y Funciones de las Facultades de Derecho Latinoamericanas.

F I N E S

1.—Compete a las Facultades de Derecho de América Latina la investigación, enseñanza y difusión de los sistemas jurídicos; como también promover que esos sistemas:

a) Contribuyan a la formación de una conciencia colectiva basada en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en los ideales de justicia y democracia, de paz y de libertad;

b) Realicen la justicia social que permita incorporar las masas populares a un régimen de bienestar general;

c) Formen una conciencia cívica tendiente al cumplimiento de los deberes ciudadanos y de servicio social;

ch) Estimulen la custodia, el progreso y la extensión de la cultura jurídica nacional, latinoamericana y universal;

(1) El proyecto de Declaración de Principios y Recomendaciones sobre la enseñanza del derecho aprobado en general en México en 1959, fue publicado en el N° 113 de nuestra Revista.

- d) Pugnen por el buen funcionamiento de la Administración de justicia y por el respeto a la norma jurídica positiva, y
- e) Fomênten, con base a la unidad espiritual de la América Latina, un pensamiento filosófico-jurídico propio.

FUNCIONES

2.—Para el cumplimiento de sus finalidades, las Facultades de Derecho de América Latina desempeñan, en un régimen de plena libertad de Cátedra e Investigación, las siguientes funciones:

- a) La enseñanza del derecho, a efecto de formar e informar hombres de derecho, provistos de conocimientos adecuados, satisfactoria capacidad técnica y sólida formación ética;
- b) La formación de docentes e investigadores;
- c) El establecimiento y fomento del intercambio permanente entre las distintas Facultades de Derecho de Latinoamérica;
- ch) El asesoramiento técnico a los organismos públicos;
- d) La organización y desarrollo de la investigación jurídica y social, especialmente orientada a la solución de los problemas propios de la región y de los comunes con naciones hermanas, y
- e) La difusión de la cultura jurídica para el conocimiento y respeto general de los derechos humanos y el afianzamiento de la conciencia jurídica y social del pueblo.

II. Organización de la Enseñanza.

PROFESORES E INVESTIGADORES

3.—Los cargos docentes son inamovibles, sin perjuicio del sistema de revisión adoptado en el estatuto universitario respectivo o en la legislación de cada país.

4.—Salvo los casos en que la notoria idoneidad autorice la designación directa, la provisión de los cargos docentes debe efectuarse por concurso de méritos, de oposición o de méritos y oposición.

La calidad de profesor extraordinario o de libre docencia se adquirirá previa evaluación de la obra jurídica realizada por el candidato.

5.—Es imprescindible la organización de medios teórico-prácticos de capacitación docente y científica en el plano universitario y, particularmente, de capacitación para la enseñanza del derecho y de las ciencias que de él tratan o que a él conciernen.

DECLARACION DE PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES

135

6.— El nombramiento del personal docente bajo el régimen de dedicación total o el de tiempo completo, sólo se considera recomendable en los casos en que la actividad comprenda, principal o exclusivamente, la investigación científica.

En los demás casos debe encuadrarse la función docente en el régimen de dedicación parcial, de modo de hacer conciliable la enseñanza con un contacto regular del profesor con el medio y la actividad profesional.

7.— Las Facultades de Derecho Latinoamericanas deben promover: el intercambio, en todas sus formas, de profesores e investigadores; las giras o visitas de estudios, las jornadas o mesas redondas, las becas, los congresos o conferencias y, en general, todos los medios que conduzcan al mejor y recíproco conocimiento de los juristas y de sus especialidades, al perfeccionamiento del personal docente y científico de las Facultades de Derecho Latinoamericanas y al progreso de éstas mediante el aprovechamiento de ajenas o comunes iniciativas y experiencias.

8.— Los docentes tienen derecho:

- a) A ser respetados en la libre expresión de sus opiniones;
- b) A integrar los órganos de gobierno y asesoramiento universitarios;
- c) A la difusión de su producción científica por medio de servicios universitarios adecuados;
- ch) A una remuneración ajustada a la jerarquía técnica de sus servicios y al esfuerzo que requieren;
- d) Al goce calificado de un sistema de becas de perfeccionamiento;
- e) A la liberación de su deber de explicar su materia durante un año, período en el cual el profesor aprovechará para perfeccionarse o escribir;
- f) Al establecimiento de regímenes preferenciales y para la adquisición de textos y material científico, y
- g) A la institución de un seguro social pleno y tendiente a la seguridad actual del profesor e investigador, y futura de sus herederos.

9.— Los docentes e investigadores están obligados:

- a) A la dirección o realización efectiva de los cursos o investigaciones a su cargo y al cumplimiento regular de las otras tareas que les correspondan;
- b) A la producción científica adecuada a su jerarquía, debiendo los docentes redactar sus explicaciones para su publicación y circulación;
- c) A la colaboración en las funciones de gobierno y asesoramiento universitarios, y

ch) A la participación, en la medida de sus posibilidades, en los planes de extensión universitaria.

ALUMNOS Y GRADUADOS

10.— Las Facultades de Derecho Latinoamericanas deben estar democráticamente abiertas al ingreso de todo candidato idóneo para formar su alumnado.

Para el ingreso a la Facultad, será suficiente haber aprobado los cursos de la enseñanza secundaria y preuniversitaria, los cuales deberán asegurar, por su contenido y coordinación con la enseñanza universitaria, un mínimo de aptitudes para los estudios superiores.

Es necesario el establecimiento de servicios de orientación vocacional que, en las oportunidades adecuadas, ofrezcan al estudiante la posibilidad de analizar su vocación y sus aptitudes generales para el estudio y, especialmente, para cada carrera.

11.— Las Facultades de Derecho deberán contar con los medios necesarios para poder atender debidamente al ingreso de todos los que lo soliciten y establecer un procedimiento racional y continuado de selección a fin de mantener un nivel elevado de los estudios y asegurar en sus egresados, efectiva competencia profesional.

12.— Las Facultades de Derecho Latinoamericanas deben otorgar las posibilidades para el cumplimiento, por parte de los alumnos, de sus deberes de escolaridad y para el perfeccionamiento profesional y científico de sus graduados.

13.— Los estudiantes tienen derecho:

a) A la intervención directa en los órganos de gobierno universitario;

b) A la agremiación y al reconocimiento por las autoridades universitarias, de sus entidades representativas;

c) A que no se restrinja por ningún medio o concepto la emisión de su pensamiento, y

ch) A la organización de un completo servicio de bienestar estudiantil.

14.— En cuanto a las obligaciones generales de los estudiantes, las Facultades de Derecho hacen suyas las declaraciones pertinentes contenidas en la Carta de la Unión Latinoamericana de Universidades y, además, señalan las siguientes obligaciones principales:

a) El alumno debe hacer del estudio su ocupación primordial;

b) Debe asistir a las cátedras y realizar los trabajos que se le asignen;

DECLARACION DE PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES

137

- c) Debe cumplir estrictamente las disposiciones reglamentarias;
- ch) Debe esforzarse por mantener o elevar el nivel ético estudiantil;
- d) Debe divulgar y extender la cultura universitaria en colaboración con el personal docente, y
- e) Debe servir obligatoriamente en los consultorios gratuitos de asistencia jurídica para pobres y en otros organismos afines, oficiales o reconocidos por la autoridad competente.

PLANES DE ESTUDIO

15.— Los planes de estudio de las Facultades de Derecho deben ajustarse a los requerimientos sociales de cada país, y las materias que en ellos se incorporen, al igual que las formas cómo deben ser estudiadas, estarán estrechamente vinculadas a la realidad del Derecho en cada comunidad y en su vida de relación con las demás comunidades, en particular con las de América Latina.

16.— Los planes de estudio deben ser flexibles, consultando dos órdenes de materias, unas obligatorias y otras optativas con un quantum obligatorio.

Los planes deben contener un ciclo básico común de materias obligatorias que capaciten para el ejercicio integral de la profesión y que proporcionen una adecuada cultura jurídica y social.

17.— Las Facultades de Derecho Latinoamericanas habrán de procurar la igualdad o, por lo menos, la analogía en el enunciado, la ubicación y el contenido de ciertas asignaturas que, con fines culturales o científicos, aparecen hoy en los planes de estudio de la mayoría de ellas, tales como: Introducción al Estudio de las Ciencias Jurídicas, Historia del Derecho, Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica, Económica, etc.

18.— En los planes de estudio, debe propenderse a la orientación de las materias hacia lo latinoamericano, citándose por vía de ejemplo los siguientes asuntos, que no constituirán necesariamente cátedra separada: Derecho Internacional Latinoamericano, Historia del Derecho Aborigen, Indiano y Patrio de la América Latina, Sociología Jurídica Latinoamericana, Derecho Económico Latinoamericano, Derecho Aeronáutico Latinoamericano, Derecho Administrativo Latinoamericano. Esta preocupación podrá ser satisfecha a través de institutos latinoamericanos e interamericanos.

19.— Debe procurarse uniformar, en la medida de las posibilidades nacionales y con alcance para toda la América Latina, la ubicación, contenido y extensión de ciertas asignaturas básicas de Derecho Positivo.

20.— Los planes o los programas de estudio comprenderán necesariamente la Deontología cuyo destino principal es propiciar un elevado nivel ético en el ejercicio de las profesiones jurídicas.

21.— Cada asignatura o disciplina será servida, siempre que el número de alumnos lo aconseje, por dos o más profesores y sus equipos de personal auxiliar en otras tantas cátedras paralelas, si es dable, con horarios diversos.

GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES

22.— Es de la competencia exclusiva de las Facultades de Derecho Latinoamericanas el otorgamiento de los respectivos grados académicos y títulos profesionales, sin perjuicio, a este último respecto, de las reservas o limitaciones que establezcan las leyes.

23.— Para la obtención del grado de doctor, como grado académico superior, debe realizarse una auténtica profundización en el dominio de un sector de las Ciencias Jurídicas y Sociales, demostrado en la tesis y en la prueba de grado correspondientes.

24.— Sin perjuicio de las modalidades que la legislación o los precedentes históricos impliquen para algunos países, las Facultades de Derecho Latinoamericanas deben promover la unidad y equivalencia de los estudios jurídicos y de los diversos grados académicos.

25.— El control disciplinario del ejercicio de la profesión de abogado debe corresponder al propio gremio organizado como corporación de Derecho Público.

III. METODOLOGIA Y CONTROL DE LA ENSEÑANZA.

26.— Las Facultades de Derecho Latinoamericanas consideran que la enseñanza de las Ciencias Jurídicas habrá de inspirarse en los siguientes principios:

a) Debe orientarse en el sentido de procurar un adecuado equilibrio en la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, con miras a formar al mismo tiempo al profesional, al jurista y, básicamente, al investigador;

b) Debe comprender no sólo el conocimiento del ordenamiento jurídico, sino también de los hechos sociales y económicos que éste regula;

c) Debe procurar la conciliación del sistema de disertaciones magisteriales con el diálogo o coloquio del alumno con el profesor;

ch) Debe excluirse la repetición memorística de textos legales y de doctrinas;

DECLARACION DE PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES

139

d) Debe evitarse el recargo informativo o de detalles en las asignaturas, y

e) Las materias deben ser enseñadas, estudiadas y aprendidas mediante el empleo coordinado de la exposición magisterial con el sistema de preseminario y seminario y con otras formas de Pedagogía Activa.

27.—Concurren a la Pedagogía Activa los órganos, las unidades y las funciones que, a continuación, se expresan:

Los Seminarios, que en lo posible deben coordinar sus actividades con la de las Cátedras, permitirán a los estudiantes desempeñar un papel activo en su propia formación, en la exposición de temas doctrinales, en la solución de casos prácticos y en el comentario de las tendencias jurisprudenciales, previa la formación técnica obtenida en los Preseminarios.

Los Institutos deberán tomar a su cargo el estímulo, la orientación y la realización de la investigación jurídica como medio de interpretar y superar las soluciones del Derecho Positivo.

Las Bibliotecas deberán adoptar una organización funcional eficiente y prestar servicios adecuados al alumno, al investigador, al catedrático y al público en general.

28.—La evaluación del rendimiento en el estudio y aprendizaje considerará tanto la satisfacción de los deberes enunciados en el N° 14, letra b), como los resultados de las pruebas y/o exámenes.

Al servicio del control de la escolaridad debe mantenerse un adecuado sistema de registro y muestra de datos por cada alumno.

29.—Los exámenes deben orientarse preferentemente a comprobar el grado de formación más que el de información del estudiante. Deben ser públicos y ofrecer las más amplias garantías de seriedad e imparcialidad de tal modo que el factor suerte se reduzca al mínimo.

30.—Las calificaciones constituyen un estímulo y un medio eficaz de valoración del rendimiento escolar, a cuyo efecto deben integrar una escala suficientemente amplia para juzgar los distintos grados de preparación de los examinados.

IV. LAS RELACIONES ENTRE FACULTADES DE DERECHO.

31.—Las Facultades de Derecho Latinoamericanas deben intensificar y hacer permanentes sus relaciones, particularmente en lo que atañe al intercambio de docentes e investigadores y de publicaciones e informaciones atinentes al Derecho y a las Ciencias Sociales.

32.—Las Facultades de Derecho Latinoamericanas practicarán, periódicamente, la revisión de sus planes de estudios, mé-

todos y programas, tomando por base las normas de la presente Declaración de Principios y Recomendaciones, y deberán dar noticias de tal trabajo y de sus resultados a las demás Facultades.

33.— Ante el imperativo histórico y vigente de coordinación y, en lo posible, de unidad, las Facultades de Derecho Latinoamericanas no sólo promoverán recíprocas y permanentes relaciones directas, sino, además, el establecimiento de entidades y sistemas que hagan a éstas más expeditas, eficaces y técnicas y que permitan el mejor y más amplio conocimiento de los problemas latinoamericanos y el afianzamiento de una auténtica conciencia continental.

RECOMENDACIONES Y ACUERDOS

1. Se recomienda que las Facultades de Derecho Latinoamericanas organicen sendos sistemas editoriales destinados a la reproducción, publicación y distribución de todo trabajo meritorio que en ellas se produzca o que a ellas se aporten sobre materias jurídicas y sociales.

2. Se recomienda que el Servicio de Bienestar Estudiantil comprenda:

- 1º— Hogar y comedor estudiantil;
- 2º— Servicio asistencial de salud;
- 3º— Régimen de becas y bolsas de viaje;
- 4º— Bolsas de trabajo;
- 5º— Préstamo amplio de textos y material científico, y
- 6º— Patrocinio de organizaciones cooperativas y afines destinadas al abaratamiento de la mantención y del material de estudio, contando para este último efecto con los mismos beneficios establecidos en favor de los docentes.

3. Se recomienda adoptar la siguiente nomenclatura y concepción respecto de las unidades y órganos de Pedagogía Activa que se expresan:

a) La Cátedra es la unidad docente en que profesores y alumnos colaboran en la adquisición por éstos de los conocimientos propios a la disciplina;

b) El Preseminario es la unidad que se dedica a habilitar al alumno en el manejo de las fuentes de conocimiento del Derecho, especialmente textos legales y reglamentarios, bibliografía y repertorios de jurisprudencia;

c) El Seminario es la unidad que se dedica al ejercicio del método en la investigación jurídica con ayuda de los conocimientos técnicos adquiridos en el Preseminario;

ch) El Instituto es la unidad de investigación superior para

DECLARACION DE PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES

141

el progreso de las Ciencias Jurídicas y la formación de especialistas, y

d) Las Bibliotecas Jurídicas y Sociales deben organizarse científicamente de tal modo que se faciliten al máximo las posibilidades de acceso al material heurístico de maestros, estudiantes, profesionales e investigadores. Su dirección y administración debe encomendarse a personal especializado.

4. Se recomienda la intensificación del estudio de las Instituciones Jurídicas Latinoamericanas en las cátedras y centros de Derecho Comparado hoy existentes, y se recomienda la creación de aquéllas o de éstos en las Facultades que no los tuvieron.

5. Se propone que la Unión de Universidades establezca un Departamento de Coordinación de Facultades y Escuelas de Derecho (de Ciencias Jurídicas y Sociales) Latinoamericanas con la finalidad de asegurar las relaciones permanentes entre las mismas y procurar su perfeccionamiento.

El Departamento Coordinador tendría principalmente las siguientes finalidades:

a) Propugnar la aplicación de los principios y recomendaciones comprendidos en la presente Declaración;

b) Organizar un régimen permanente de intercambio del material científico y pedagógico producido en América Latina dentro del área de su competencia;

c) Promover la unificación de los regímenes de equivalencia de estudios y grados académicos y de reválida de los títulos profesionales, y

ch) Coordinar y fomentar los sistemas de becas internacionales para docentes y estudiantes, así como los servicios de extensión universitaria.

En tanto se crea el Departamento Coordinador, las finalidades y funciones previstas serán atendidas mediante acuerdos directos entre las Facultades de Derecho (de Ciencias Jurídicas y Sociales).

6. Recomiéndase la organización y mantenimiento de un Registro de nombres y domicilios de los profesores, graduados y estudiosos de América, que trabajan en materias jurídicas y sociales, a fin de vincularlos entre sí y posibilitar por este medio una labor de verdadero alcance americano.

7. Recomiéndase, asimismo, la institución de un Fondo Permanente Latinoamericano destinado al intercambio de juristas de los distintos países.

Lima, 14 de abril de 1961.